Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de veintiuno de febrero de enero de dos mil veinticuatro.

Visto el expediente relativo al recurso de revisión **04834/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por **una persona usuaria del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense que no proporcionó nombre**, a quien en lo sucesivo se le denominará **la parte Recurrente**, en contra de la respuesta a su solicitud de información identificada con número de folio **00385/SMOV/IP/2023,** proporcionada por la **Secretaría de Movilidad**, en lo sucesivo el **Sujeto Obligado**; se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

1. **Solicitud de acceso a la información.** Con fecha **siete de agosto de dos mil veintitrés**, la persona solicitante formuló solicitud de acceso a información pública al **Sujeto Obligado** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en adelante SAIMEX, en la que requirió lo siguiente:

*“Solicito la siguiente información de la Secretaría: 1. Se me informe sobre todos los inmuebles que esta Secretaría tiene arrendados para todos sus usos (agregar lista) así como la información acerca de los arrendatarios. 2. Cuántos contratos de personal tiene la Secretaría vía el sistema de subcontratación conocido como Outsourcing desde el año 2022 y lo que se lleva hasta este momento así como la empresa que hizo las contrataciones. 3. Con cuántos vehículos cuenta la Secretaría (la lista de los mismos), cuántos de ellos son propios y cuántos están bajo el esquema de arrendamiento, para estos últimos, qué empresa o empresas son las que prestan el servicio del arrendamiento. 4. Se me informe sobre los equipos de cómputo, impresoras, multifuncionales, cuántos son propios y cuántos arrendados y sobre este último, qué empresa o empresas son las que prestan el servicio del arrendamiento. 5. Anexar el capítulo 4000 del presupuesto de ingresos y egresos 2021, 2022 y 2023 de esta Secretaría.” (Sic)*

**Modalidad elegida para la entrega de la información:** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

1. **Respuesta.** En fecha **veinticinco de agosto de dos mil veintitrés**, el **Sujeto Obligado** remitió respuesta a la solicitud de información, al tenor de lo siguiente:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*En atención a su solicitud de información pública ingresada a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense "SAIMEX" con número de folio 00385/SMOV/IP/2023, y con fundamento en lo establecido por los artículos 3 fracción XXXIX, 4 segundo párrafo,12 segundo párrafo, 59 fracciones I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 1 y 37 de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios,* ***le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Unidad Administrativa, no se encontró registro alguno de lo solicitado.”*** *(Sic)*

1. **Recurso de revisión.** Derivado de la respuesta del **Sujeto Obligado,** la persona solicitante interpuso Recurso de Revisión a través del **SAIMEX** en fecha **veinticinco de agosto de dos mil veintitrés**, a través del cual expresó lo siguiente:

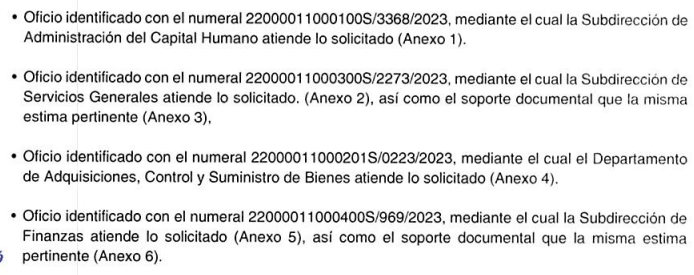
**Acto impugnado.** *“La respuesta a la solicitud de información con Folio: 00385/SMOV/IP/2023 en la que se informa que no se encontró registro alguno de lo solicitado.” (Sic)*

**Razones o motivos de la inconformidad:** *“La respuesta que me fue enviada de parte de la Secretaría de Movilidad, incumple diversas disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que se me está negando el derecho a conocer información pública en posesión de este sujeto obligado, pues dentro de sus obligaciones está la de recabar y difundir dicha información. El artículo 7 de la citada Ley, nos dice que el Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios. Y la negativa de la información justificando con que no se encontró registro alguno carece de fundamentación suficiente, pues dentro de su tabla de aplicabilidad está el poseer y difundir el tipo de información que fue solicitada. En este mismo sentido, el tipo de información que se solicitó deriva del ejercicio de las facultades, competencias o funciones de la Secretaría, como se menciona en el artículo 18 y que se complemente con el artículo 19 de la misma Ley. Pues, además, la respuesta no está suficientemente motivada. Más allá, incluso, el artículo 20 nos refiere que ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. Y en ello, es importante resaltar, que no se demostró ninguna excepción por la que decidieron declarar la inexistencia de la información. Por mi parte, se acredita que la información solicitada es de utilidad y resulta relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas implementadas por esta secretaría dependiente del Poder Ejecutivo. Este recurso de revisión se fundamenta y motiva en el artículo 179, fracción III que nos indica que procede ante la declaración de inexistencia de la información. Además, podría incluso constituir una responsabilidad administrativa al haber declarado la inexistencia de la información cuando esta, debe existir de manera total o parcial en sus archivos. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente: ORDENAR AL SUJETO OBLIGADO (SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO), LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.” (Sic)*

1. **Turno.** De conformidad con el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el recurso de revisión número **04834/INFOEM/IP/RR/2023**, se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la **Comisionada Guadalupe Ramírez Peña** para su análisis, estudio, elaboración del proyecto y presentación ante el Pleno de este Instituto.
2. **Admisión del recurso de revisión**: En fecha **treinta de agosto de dos mil veintitrés**, la Comisionada Ponente admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.
3. **Informe Justificado.** De las constancias que obran en el expediente electrónico aperturado con motivo del presente medio de impugnación, se advierte que durante el periodo de manifestaciones el **Sujeto Obligado** en fecha **siete de septiembre de dos mil veintitrés** rindió su informe justificado, a través de los archivos electrónicos que contienen la información siguiente:

* ***“Informe Jurtificado 4834.pdf”*:** Oficio número CCT/UT/0459/2023 del siete de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual la Titular de la Unidad de Transparencia rinde informe justificado dentro del recurso de revisión que nos ocupa, en el que indica que con la finalidad de atender lo requerido requirió a los servidores públicos habilitados de la Coordinación Administrativa y de la Coordinación de Informatica, al ser los competentes para dar respuesta, quienes mediante los oficios T-328/2023 y 22000005000000S/0463/2023 se pronunciaron sobre lo requerido y en tal virtud se anexaban los mismos.
* ***“463-2023.pdf”*:** Oficio 22000005000000S/0463/2023 del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual el Coordinador de Informática señala que, de conformidad con los artículos 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así como las facultades establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad y el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad, en lo referente a la totalidad del texto de la solicitud, la unidad administrativa a su cargo no cuenta con esa información, ya que los cuestionamientos versan sobre actividades que no realiza dicha Coordinación.
* ***“328-2023.pdf”*:** Archivo que contiene los siguientes documentos:

**-**Oficio número T-328/2023 del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual el Servidor Público Habilitado en materia de transparencia informa al Titular de la Unidad de Transparencia que, con el fin de dar atención a lo peticionado, adjuntaba en copia simple las respuestas contenidas en los siguientes oficios:

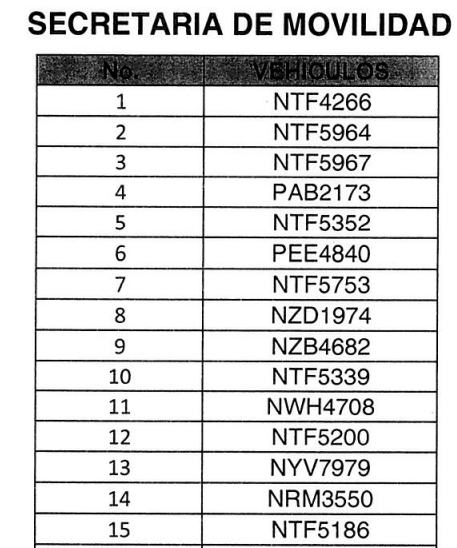


**-**Oficio número 22000011000100S/3368/2023 del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual la Subdirectora de Administración de Capital Humano, con relación al requerimiento número 2, contenido en la solicitud, relativo a “*2. Cuántos contratos de personal tiene la Secretaría vía el sistema de subcontratación conocido como Outsourcing desde el año 2022 y lo que se lleva hasta este momento así como la empresa que hizo las contrataciones.*”, **señala que no existe algún esquema de subcontratación conocido como Outsourcing en esa Secretaría.**

-Oficio número 22000011000300S/2273/2023 del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual el suplente de la Titularidad de la Subdirección de Servicios Generales, con relación al requerimiento marcado con el **numeral 1** de la solicitud, sobre los arrendatarios esa Subdirección de Servicios Generales no se pronuncia por no encontrarse en el ámbito de su competencia; no obstante, en atención al principio de máxima publicidad indica que lo relativo a los inmuebles arrendados pueden ser consultados en la siguiente liga electrónica: <https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/SMOV/art_92_xxxviii_d.web>

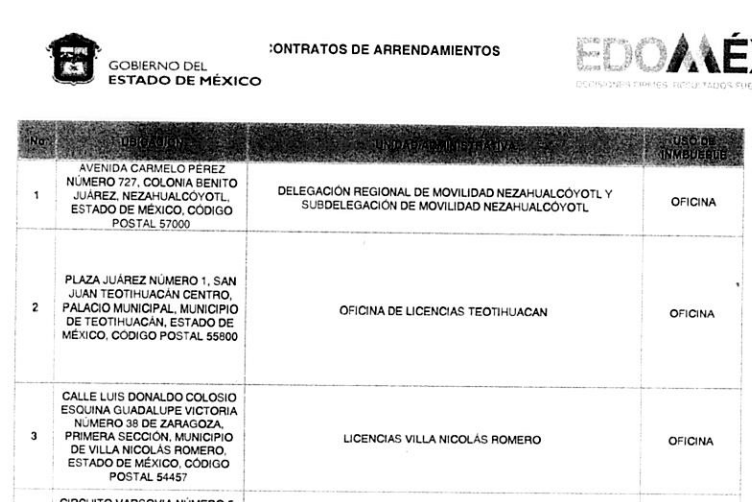
Asimismo, con relación al requerimiento marcado con el **numeral 3** de la solicitud, indicó que se anexaba el listado de los vehículos que conformaban la plantilla vehicular de esa Secretaría de Movilidad, y en lo referente a los vehículos que están bajo el esquema de arrendamiento se encuentran como información pública, registro 279 año 2021, en la siguiente liga: <https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/FINANZAS.web>

-Listado de los vehículos que conformaban la plantilla vehicular de la Secretaría de Movilidad:



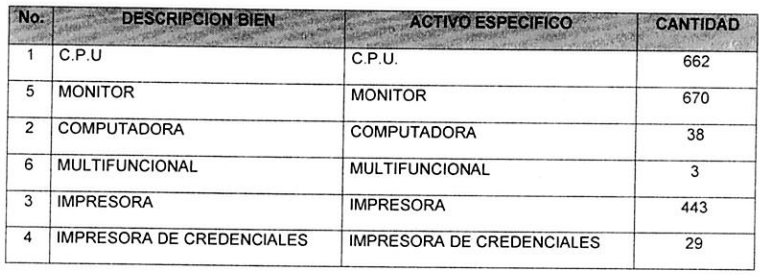
[…]”

-Listado de los 19 contratos de arrendamientos de inmuebles para uso de la Secretaría de Movilidad:



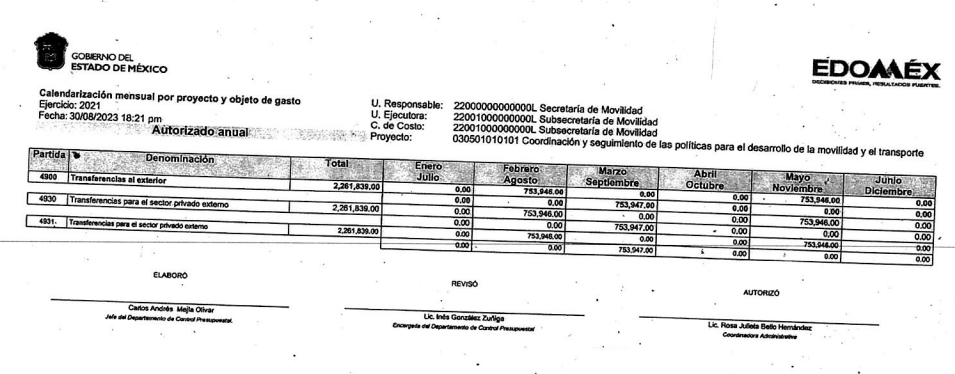
[…]”

-Oficio número 22000011000201S/0223/2023 del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual el Jefe del Departamento de Adquisiciones, Control y Suministro de Bienes, sobre el requerimiento marcado bajo el **numeral 4** de la solicitud de información, informa que sólo puede atender lo relativo a los bienes informáticos propios y no los arrendados; proporcionando el siguiente cuadro:

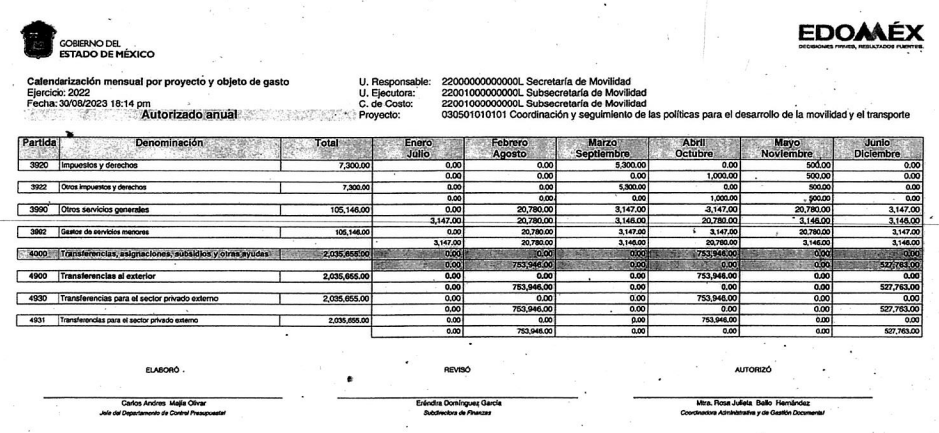


-Oficio número 22000011000400S/969/2023 del treinta de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual la Subdirectora de Finanzas informa que, con relación al requerimiento marcado bajo el numeral **4** de la solicitud, se adjuntaban 3 fojas, en las que se plasma el presupuesto de egresos autorizado para el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.

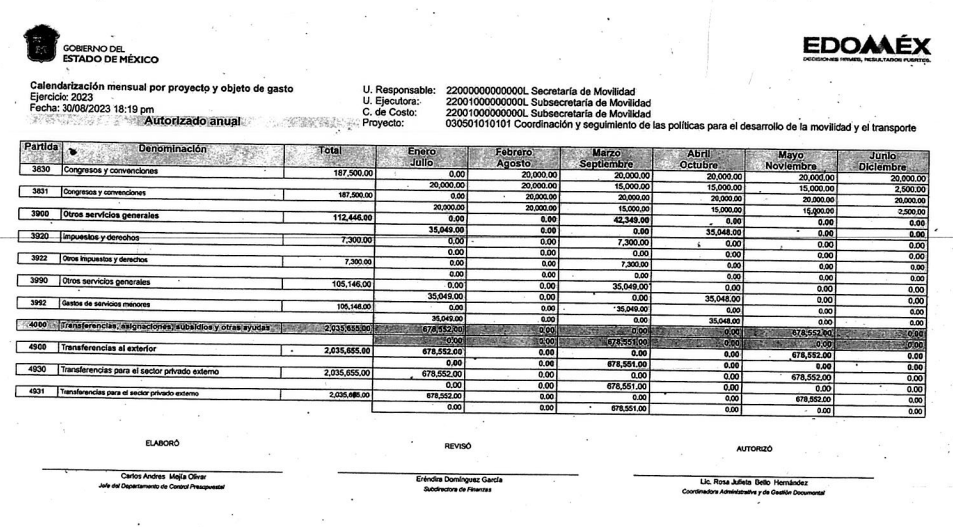
-Documento denominado “Calendarización mensual por proyecto y objeto de gasto” del ejercicio 2021 de la Secretaría de Movilidad:



-Documento denominado “Calendarización mensual por proyecto y objeto de gasto” del ejercicio 2022 de la Secretaría de Movilidad:



-Documento denominado “Calendarización mensual por proyecto y objeto de gasto” del ejercicio 2023 de la Secretaría de Movilidad:



Documentos los anteriores que se pusieron a la vista de la parte **Recurrente** a efecto de que hiciera valer manifestaciones que a su derecho resultaran convenientes, o bien rindiera alegatos; no obstante fue omisa en ejercer dicha prerrogativa.

1. **Ampliación de plazo:** El **nueve de febrero de dos mil veinticuatro**, se notificó a las partes el Acuerdo de Ampliación de Plazo para resolver el medio de impugnación que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

**a) Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

**b) Actividad Procesal del interesado**: Acciones u omisiones del interesado.

**c) Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “**TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”**, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”,** visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.

1. **Cierre de instrucción**. En fecha **quince de febrero de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Debido a que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O:**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió su respuesta en fecha **veinticinco de agosto de dos mil veintitrés**,mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente** se tuvo por presentado el **veinticinco de agosto de dos mil veintitrés**, esto es el mismo día en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Sin que contraríe a lo anterior, el artículo 178 en análisis, refiere que el plazo de quince días hábiles se contará a partir del día siguiente de la fecha en que el afectado tuvo conocimiento de la resolución materia de impugnación, ya que ello debe entenderse para el efecto de que transcurrido dicho plazo ya no podrá presentarse el medio de impugnación o si es que se presenta, el mismo se considerará extemporáneo, no así cuando el medio de defensa se interponga antes de que comience a correr el plazo legal; tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 1ª. /J.41/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 569 de la Décima época que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO****. Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”*

Así también, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis del formato de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el **SAIMEX.**

Por otro lado, es de suma importancia mencionar que, si bien la parte **Recurrente** no proporcionó nombre como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX; sin embargo, el no proporcionar un nombre no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas,******con*** *nombre incompleto o seudónimo****serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente.*** *No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo con el artículo 179, fracciones I y XIII del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

*[…]*

***I. La negativa a la información solicitada;***

***[…]***

***XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; y***

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte que, el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la respuesta e informe justificado otorgado por el Sujeto Obligado son adecuados y suficientes para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la parte Recurrente,** o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información oportuna.

**Cuarto. Estudio del asunto.** Antes de entrar al análisis de los pronunciamientos del **Sujeto Obligado** en la respuesta proporcionada, es necesario mencionar que el derecho de acceso a la información está consagrado en instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano se ha adherido, sin oponer reserva alguna sobre lo que nos interesa, adoptando dichas disposiciones al Derecho Interno, específicamente a nivel Constitucional, tal y como lo prevén los arábigos 1 párrafos primero, segundo y tercero y 6 apartado A fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII que a la letra señalan:

***Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte****, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

***Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.***

***Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.*** *En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley*

*[…]*

***“Artículo 6o.***

*[...]*

***A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,*** *en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes*** *Ejecutivo, Legislativo* ***y Judicial****, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,* ***es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,*** *en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.***

***III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública,*** *a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

***IV.*** *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.*

***V.*** *Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

***VII.*** *La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. [...]”*

Esto es, que cualquier persona tiene el derecho al acceso de la información pública, información que consiste en aquella que sea generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, como así también lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en su artículo 4, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y accesible, de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se transcribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones”.***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03-17, expuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dice:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Siempre y cuando no se trate de información reservada o clasificada, que difundirla pondría en riesgo la seguridad jurídica y física del titular de la información, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*CRITERIO 0002-11. INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

***2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y***

***3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”***

De ahí que el **Sujeto Obligado** cuenta con el deber de satisfacer las solicitudes de acceso a la información que le sean formuladas y entregar la información pública que obre en sus archivos pudiendo ser de manera electrónica; más aún si la misma se trata de información relativa a obligaciones de transparencia, la cual se relaciona con aquella que se genere de acuerdo con sus facultades, atribuciones y obligaciones señaladas por la Ley en la materia[[1]](#footnote-1), así como de interés público, es decir, aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados[[2]](#footnote-2), como pudiera tratarse de aquella relacionada con las obligaciones de transparencia señaladas en los artículos 92 y 100 de la Ley de la Materia.

Dicho lo anterior, en el caso se analizará el agravio hecho valer por la parte **Recurrente** que actualiza las causales de procedencia previstas en las fracciones I y XIII del artículo 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, relativas a **la negativa a la información solicitada, así como la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta.**

En principio, resulta conveniente recordar que la pretensión de la parte **Recurrente** es obtener del **Sujeto Obligado** la siguiente información:

* + - * **Todos los inmuebles que posee por arrendamiento para todos sus usos, así como la información acerca de los arrendatarios. (Sobre este requerimiento la persona solicitante requiere se entregue lista)**
      * **Cuántos contratos de personal tiene vía sistema de subcontratación conocido como Outsourcing desde el año 2022 y lo que se lleva hasta este momento, así como la empresa que hizo las contrataciones. (Sobre este requerimiento la persona solicitante requiere se entregue listado de los mismos)**
      * **Con cuantos vehículos cuenta y agregar lista de los mismos; cuántos de ellos son propios y cuántos están bajo el esquema de arrendamiento, y de estos últimos indicar la empresa o empresas que prestan el servicio del arrendamiento.**
      * **De los equipos de cómputo, impresoras y multifuncionales con los que cuenta, ¿Cuántos son propios y cuántos arrendados? y sobre estos últimos, señalar la empresa o empresas que prestan el servicio del arrendamiento.**
      * **El capítulo 4000 del presupuesto de ingresos y egresos de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.**

Para un mejor entendimiento de las consideraciones de la presente resolución, se procederá a subdividir el análisis de los requerimientos efectuados por la persona solicitante, la información aportada tanto en respuesta como en informe justificado a cada uno de ellos, en **cinco** apartados:

* + - 1. **Todos los inmuebles que posee por arrendamiento para todos sus usos, así como la información acerca de los arrendatarios. (Sobre este requerimiento la persona solicitante requiere se entregue lista):**

Ahora, antes de iniciar con el análisis al presente requerimiento, es importante mencionar, que la persona solicitante requirió obtener, entre otra, la información acerca de los arrendatarios de los inmuebles que tiene en arrendamiento la Secretaría de Movilidad, sin embargo del artículo 7.670 del Código Civil del Estado de México vigente, se advierte que tiene carácter de “*arrendatario*” la persona que adquiere el derecho a usar un bien o un inmueble a cambio de un precio, y como “*arrendador*” a la persona que transmite el uso o goce temporal de un bien al arrendatario.

De esta manera, y del análisis armónico al requerimiento marcado en el numeral **1** de la solicitud de información, se advierte que a la información a la que pretende acceder el particular, además de todos los inmuebles que posee en arrendamiento la Secretaría de Movilidad para todos sus usos, **es la información acerca de los arrendadores.**

Por lo que, la persona solicitante al no ser experto en la materia y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se procede a suplir la deficiencia de la solicitud, y en tal virtud, se tiene que la pretensión de la persona solicitante es acceder, entre otra, **a la información acerca de los arrendadores de los inmuebles que posee en calidad de arrendamiento la Secretaría de Movilidad.**

Acotado lo anterior, se procede a contextualizar la naturaleza de la información solicitada, y para ello conviene realizar el análisis de los artículos 1°, fracción I y 4° de la Ley de la de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, **especifica que las secretarias y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado**, serán los encargados de realizar los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición (bienes muebles e inmuebles), **arrendamiento (bienes muebles e inmuebles),** y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, los cuales se adjudicarán a través de **licitaciones públicas, invitación restringida o adjudicación directa, mediante convocatoria pública**, que señalan al respecto lo siguiente:

***“Artículo 1.-*** *Esta Ley tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:*

***I. Las secretarías y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado.***

*…*

***Artículo 4.-*** *Para los efectos de esta Ley, en las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:*

*I. La adquisición de bienes muebles.*

*II. La adquisición de bienes inmuebles, a través de compraventa.*

*III. La enajenación de bienes muebles e inmuebles.*

***IV. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.***

*V. La contratación de los servicios, relacionados con bienes muebles que se encuentran incorporados o adheridos a bienes inmuebles, cuya instalación o mantenimiento no implique modificación al bien inmueble.*

*VI. La contratación de los servicios de reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles.*

*VII. La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, así como de los de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles.*

*VIII. La prestación de servicios profesionales, la contratación de consultorías, asesorías y estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales de personas físicas bajo el régimen de honorarios.*

*En general, otros actos que impliquen la contratación de servicios de cualquier naturaleza. “*

(Énfasis añadido)

En ese contexto, conforme a los artículos 26 y 27 de dicho ordenamiento jurídico, se establece que las adquisiciones, **arrendamientos** y servicios, **se adjudicarán a través de procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa**, que señalan:

*“Artículo 26.- Las adquisiciones,* ***arrendamientos*** *y servicios* ***se adjudicarán a través de******licitaciones públicas****,* ***mediante convocatoria pública.***

*Artículo 27.-* ***La Secretaría,*** *las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos* ***podrán adjudicar adquisiciones, arrendamientos y servicios****, mediante las excepciones al procedimiento de licitación que a continuación se señalan:*

***I. Invitación restringida.***

***II. Adjudicación directa”***

*(*Énfasis añadido*)*

Así, en lo que respecta sobre la licitación pública, el artículo 29 de la Ley de la Contratación Pública en mención, indica que en este procedimiento deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes. Todo licitante que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la licitación tendrá derecho a presentar su propuesta.

Asimismo, el artículo 33, del mismo ordenamiento legal, puntualmente señala el contenido que deberá tener la convocatoria para la celebración de las licitaciones públicas y por su parte, el consecutivo 34 señala que las bases de la licitación pública tendrán un costo de recuperación y contendrán los requisitos que se establezcan en el reglamento de dicha Ley.

Por lo que, en las licitaciones se debe seguir el procedimiento marcado en el artículo 35 del precitado ordenamiento, que literalmente establece:

***“Artículo 35****.- En los procedimientos de licitación pública se observará lo siguiente:*

*I. El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo por el servidor público que designe la convocante, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley.*

*II. El comité de adquisiciones y servicios evaluará y analizará las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes en el ámbito de las respectivas competencias de sus integrantes, y emitirá el dictamen de adjudicación.*

*III. Las bases de licitación se pondrán a la venta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el día hábil anterior a la fecha de celebración de la junta de aclaraciones o, en su defecto, del acto de presentación y apertura de propuestas.*

*IV. Las convocantes podrán modificar los plazos y términos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, hasta cinco días hábiles anteriores a la fecha de la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas.*

*V. Las modificaciones no podrán limitar el número de licitantes, sustituir o variar sustancialmente los bienes o servicios convocados originalmente, ni adicionar otros distintos.*

*VI. Las modificaciones a la convocatoria o a las bases se harán del conocimiento de los interesados hasta tres días hábiles antes de la fecha señalada para el acto de presentación y apertura de propuestas.*

*VII. Se emitirá el fallo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.*

*VIII. Los licitantes se podrán registrar hasta el día y la hora fijados para el acto de presentación y apertura de propuestas.****”***

(Énfasis añadido)

Del precepto legal, se desprende que al Comité de Adquisiciones y Servicios, le corresponde evaluar y analizar las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes en el ámbito de las respectivas competencias de sus integrantes, debiendo emitir para ello un dictamen de adjudicación y conforme a dicho dictamen se deberá emitir el fallo dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.

Además, respecto al dictamen y el fallo de la adjudicación, es de señalar que los artículos 37 y 38 de la Ley en mención indican lo siguiente:

***“Artículo 37.-*** *El comité de adquisiciones y servicios realizará el análisis y evaluación de las propuestas, mediante la verificación del cumplimiento de la información y de la documentación solicitada en las bases de la licitación y conforme al criterio establecidas en las mismas. Una vez efectuado el análisis cualitativo de las propuestas presentadas, emitirá el dictamen de adjudicación a favor del oferente u oferentes que reúnan los requisitos administrativos, financieros, legales y técnicos requeridos por la convocante; garantizando en todo momento la obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.*

***Artículo 38.-*** *La convocante emitirá el fallo con base en el dictamen de adjudicación emitido por el comité de adquisiciones y servicios, y lo dará a conocer a los licitantes en junta pública, cuya fecha se informará en el acto de presentación y apertura de proposiciones, pudiéndose diferir por una sola ocasión.*

*El fallo de adjudicación surtirá efectos desde la emisión, siendo responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido, por lo que a partir de ese momento, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la formalización del contrato respectivo, en los términos señalados en el fallo.****”***

Ahora bien, por cuanto hace a la invitación restringida el artículo 44 de la Ley de la Contratación Pública del Estado de México y Municipios, dispone que podrá realizarse cuando se hubiere declarado desierto un procedimiento de licitación o cuando el importe de la operación no exceda de los montos establecidos por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente.

Además, es oportuno señalar que, las disposiciones respecto a las bases, dictámenes, fallos y fianzas, se realizan con similitud al procedimiento de licitación pública, tal como lo señala el artículo 46 de la misma Ley, que literalmente establece lo siguiente:

***“Artículo 46.-*** *El procedimiento de invitación restringida se desarrollará en los términos de la licitación pública, a excepción de la publicación de la convocatoria.” (Sic)*

Por ello, el Reglamento de la Ley en comento, en su artículo 90, indica cuales lo son los supuestos que deberán observarse para llevar a cabo dicho procedimiento:

***Artículo 90.-*** *En el procedimiento de invitación restringida se deberá observar lo siguiente:*

*I. Se invitará a un mínimo de tres personas seleccionadas de entre las que se encuentren inscritas en el catálogo de proveedores y de prestadores de servicios.*

*Se podrá invitar a personas que no se encuentren inscritas, cuando en el giro correspondiente del catálogo de proveedores y prestadores de servicios no exista el registro mínimo de personas requeridas para tal modalidad;*

*II. Las bases de la invitación restringida indicarán los aspectos de la adquisición o contratación; y*

*III. Serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de la licitación pública.****”***

En conclusión, referente a este punto cuando los procedimientos de invitación restringida, por cada procedimiento se debe contar con las bases, dictámenes, fallos y en su caso, fianzas, de haber sido esta la garantía exhibida.

Por último, y en cuanto hace a la adjudicación directa, el artículo 48 de la Ley de la Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 91 del Reglamento de dicha Ley, indican en qué supuestos puede llevarse a cabo este procedimiento.

En este sentido, el convocante debe solicitar a su comité el dictamen correspondiente del procedimiento de adjudicación directa, en el que se acredite previamente la descripción general de los bienes a adquirir; la justificación o conveniencia de llevar a cabo la adjudicación directa; y la certificación de suficiencia presupuestaria.

Además, el artículo 94 del referido Reglamento, detalla el procedimiento que se llevará a cabo en la adjudicación directa, de la siguiente manera:

***“Artículo 94.-*** *En el procedimiento de adjudicación directa se observará lo siguiente:*

*I. Las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, se efectuaran previa dictaminación del comité, a excepción de los casos previstos en las fracciones IV, VII, IX y XI del artículo 48 de la Ley; las contrataciones que se realicen con fundamento en las fracciones IV y VII, deberán corresponder a lo estrictamente necesario para atender la eventualidad o urgencia y no deberán observar ninguna otra formalidad más que la suscripción del contrato respectivo.*

***II.*** *Se considerará a la persona que atendiendo al bien o servicio que se pretenda adquirir o contratar, pueda suministrarlo o prestarlo en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;*

***III.*** *La solicitud de participación contendrá, como mínimo, la descripción y cantidad de los bienes o servicios requeridos, lugar, plazo de entrega o duración del servicio y forma de pago;*

***IV.*** *La solicitud de participación deberá señalar el día, hora y lugar en que tendrá verificativo el acto de presentación y apertura de ofertas;*

***V.*** *Atendiendo a la naturaleza de los bienes o servicios, la convocante podrá optar entre celebrar o no junta de aclaraciones, en términos de lo dispuesto por este Reglamento;*

***VI.*** *El servidor público designado por la convocante será el responsable de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas;*

***VII.*** *Se observarán, en lo conducente, las disposiciones relativas a la contraoferta; y*

***VIII.*** *El comité será responsable de emitir el dictamen de adjudicación que servirá de base para el fallo de adjudicación; correspondiendo a la convocante emitir dicho fallo, quien lo hará del conocimiento de los licitantes.****”***

*(Énfasis añadido)*

En este sentido, es de agregar que la información sobre los **procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados** se encuentra considerada como una de las obligaciones de transparencias comunes que los Sujetos Obligados tienen el deber de poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda; esto conforme a lo establecido en el artículo 92, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su fracción XXIX, dispone lo siguiente:

***“Artículo 92.****Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*(…)*

***XXIX.****La información sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,****incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados,*** *que deberán contener, por los menos, lo siguiente:*

***a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:***

***1)****La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;*

***2)****Los nombres de los participantes o invitados;*

***3)****El nombre del ganador y las razones que lo justifican;*

***4)****El área solicitante y la responsable de su ejecución;*

***5)****Las convocatorias e invitaciones emitidas;*

***6)****Los dictámenes y fallo de adjudicación;*

***7) El contrato y, en su caso, sus anexos;***

***8)****Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;*

***9)****La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;*

*10) Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales****,*** *así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;*

***11)****Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;*

***12)****Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;*

***13)****El convenio de terminación; y*

***14)****El finiquito.*

***b) De las adjudicaciones directas:***

***1)****La propuesta enviada por el participante;*

***2)****Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;*

***3)****La autorización del ejercicio de la opción;*

***4)****En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y sus montos;*

***5)****El nombre de la persona física o jurídica colectiva adjudicada;*

***6)****La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;*

***7)****El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;*

***8)****Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;*

***9)****Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;*

***10)****El convenio de terminación; y*

***11)****El finiquito.****”***

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende que los Sujetos Obligados están obligados a poner a disposición del público de manera constante y actualizada, de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, la información referente a los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, **incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.**

En ese sentido, de la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se advierte que el **Sujeto Obligado,** cuenta con la competencia para regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución, control de la adquisición y **arrendamiento de bienes** **(muebles e inmuebles);** y, para tales efectos, se auxilia de los **comités de arrendamientos**, adquisiciones y enajenaciones, quienes, entre otras funciones, emiten los dictámenes correspondientes a la adjudicación, debiendo levantar para cada procedimiento adquisitivo el acta respectiva.

Por lo tanto, **de los procedimientos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, se deben generar diversos soportes documentales, como lo son de manera enunciativa más no limitativa los mencionados en el artículo 92 en su fracción XXIX, de la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, incluidos los contratos celebrados, mismos que los entes públicos están constreñidos a transparentar,** por corresponder a información que generan con motivo de contrataciones públicas realizadas con presupuesto del erario público.

Asimismo, es de agregar que constituye otra obligación de transparencia común de los sujetos obligados, contar con el inventario de los bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad, conforme la fracción XXXVIII del artículo 92 de la Ley de Transparencia Local, en relación con la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se sigue:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

*“****Artículo 92.*** *Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*[…]*

***XXXVIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;***

*[…]”*

***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

*“****Artículo 70.*** *En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*[…]*

***XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;***

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

Asimismo, los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia establecen lo siguiente respecto al inventario de bienes muebles o inmuebles en posesión o propiedad de Sujetos Obligados:

***“XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad***

***Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles que utilicen, tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos.***

*Respecto de los bienes muebles se registrará tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo– como los vehículos y demás bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.*

*El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico), y el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público*

*Asimismo, el inventario contará con algunos de los elementos establecidos en el Acuerdo por el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.*

***Periodo de actualización: semestral***

***En su caso, 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja algún bien***

***Conservar en el sitio de Internet: información vigente respecto al inventario de bienes muebles e inmuebles.***

***En cuanto al inventario de altas y bajas, así como los bienes muebles e inmuebles donados, se conservará la información vigente y la correspondiente al semestre anterior concluido***

***Aplica a: todos los sujetos obligados”***

*(Énfasis añadido)*

Como se desprende de lo anterior, todos los sujetos obligados deberán publicar el inventario de bienes muebles e inmuebles que utilicen, tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, **tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos.**

En tal sentido, se colige que la información a la que pretende acceder la persona solicitante se encuentra relacionada con obligaciones de transparencia comunes que el **Sujeto Obligado** debe cumplir de conformidad con la normativa aplicable.

Ahora, por cuanto hace a la competencia del ente público, para poseer, generar y/o administrar la información requerida, **es de recordar que quien dio atención al requerimiento de mérito,** no obstante que fue hasta informe justificado, **fue el servidor público habilitado de la Subdirección de Servicios Generales, dependiente de la Coordinación Administrativa;** unidad administrativa que conforme el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad vigente, tiene como objetivo y dentro de sus atribuciones, con relación a lo requerido en este apartado, las siguientes:

***22000002000500S SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES***

***OBJETIVO:***

*Coordinar, gestionar y proporcionar a las unidades administrativas, los servicios generales que requieran para el desempeño de sus funciones; así como* ***controlar y administrar los bienes inmuebles para la operación de las actividades de la Secretaría.***

***FUNCIONES:***

*[…]*

*-****Tramitar ante la Dirección General de Recursos Materiales, las solicitudes de arrendamientos,*** *comodatos o figuras jurídicas* ***relacionadas con los inmuebles que requieran las unidades administrativas de la Secretaría, según la disponibilidad del recurso aprobado.***

***-Controlar y mantener actualizados los inventarios de bienes inmuebles de la Secretaría,*** *realizando los trámites para el levantamiento físico de éstos.*

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

Como se desprende de lo anterior, la **Subdirección de Servicios Generales** tiene dentro de sus atribuciones controlar y administrar los bienes inmuebles para la operación de las actividades de la Secretaría de Movilidad; tramitar ante la Dirección General de Recursos Materiales, las solicitudes de, entre otros, arrendamientos relacionados con los inmuebles que requieran las unidades administrativas del ente obligado; así como, controlar y mantener actualizados los inventarios de bienes inmuebles.

Aunado a que, atendiendo a que la solicitud de información fue turnada a la **Coordinación Administrativa**, de quien depende la Subdirección que dio respuesta al requerimiento que nos ocupa, es necesario indicar que dicha coordinación, tiene dentro de sus atribuciones la siguiente conforme el referido Manual General de Organización:

***22000002000000S COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA***

*[…]*

***FUNCIONES:***

***-Participar en los Comités de Adquisiciones y Servicios y de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones que integre la Secretaría de Finanzas.***

*[…]*

***-Suscribir los convenios y contratos relativos a la adquisición y/o contratación de bienes y servicios observando la normatividad establecida.***

*[…]*

*-****Coordinar la administración de los bienes muebles e inmuebles destinados a la Secretaría.***

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

En virtud de lo anterior, se tiene que en el caso concreto, se dio cabal cumplimiento con el requisito de turnar la solicitud de información al área competente que puede poseer, generar y/o administrar la información requerida.

A mayor abundamiento, conviene indicar que los Sujetos Obligados deben seguir el procedimiento para la atención a las solicitudes de acceso a la información, establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual es el siguiente:

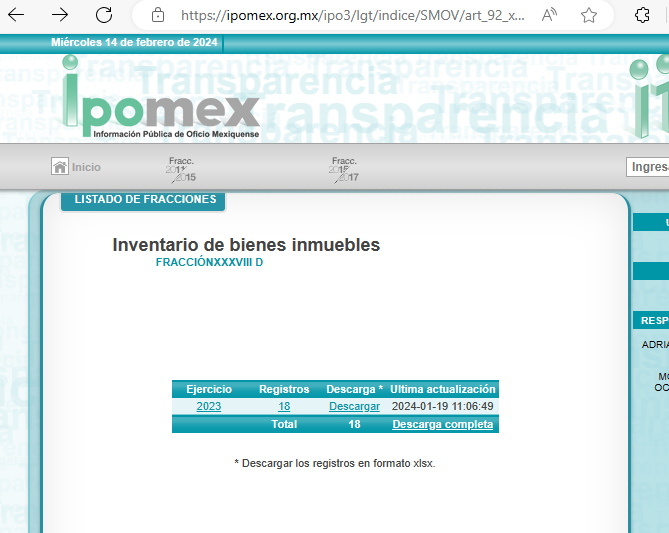
* Las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados deben garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona puede ejercer el derecho de acceso a la información; por lo que, son las responsables de hacer las notificaciones correspondientes, además de llevar a cabo de todas las gestiones necesarias para facilitar el acceso de la información;
* Los Sujetos Obligados podrán requerirle a los Solicitantes, que complementen, corrijan o amplíen su solicitud de información, cuando resulten los datos proporcionados insuficientes, incorrectos, incompletos o erróneos; solicitar dicha aclaración, interrumpirá el plazo para dar respuesta y comenzará a computarse el día siguiente al desahogo de esta;
* Las respuestas a los requerimientos informativos deberán notificarse al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder **quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de ésta.** Excepcionalmente, el plazo referido podrá ampliarse por siete días hábiles más, cuando existan razones fundadas y motivadas, a través del Comité de Transparencia;
* **Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, funciones y atribuciones, para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la documentación solicitada, con el fin de que proporcionen las expresiones documentales que se encuentren en sus archivos o que estén constreñidos a elaborar;**
* El acceso se dará en la modalidad de entrega y en su caso, de envío elegido por el solicitante, cuando no pueda entregarse en dicha modalidad, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otras; por lo cual, deberá fundamentar y motivar la necesidad de modificar el medio de entrega, y
* Las Unidades de Transparencia, tendrán disponible la información requerida durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles; por lo que, una vez transcurrida dicha temporalidad, los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán de ser el caso, a la destrucción del material.

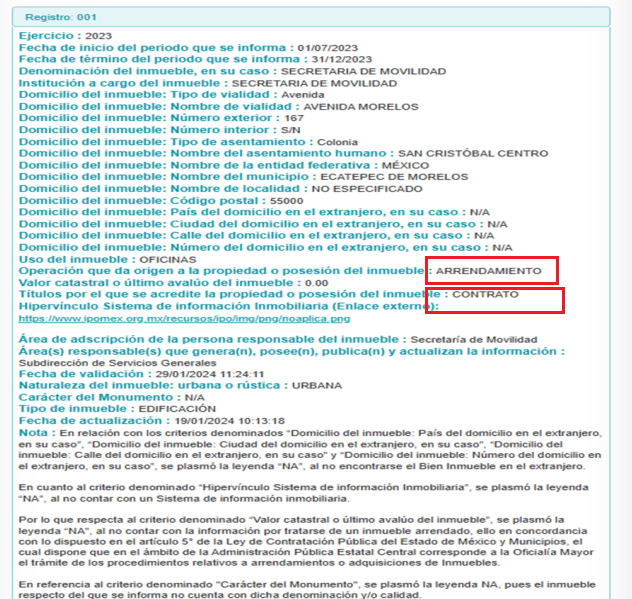
En el caso se desprende que la Unidad de Transparencia, no obstante que turnó la solicitud de información a las áreas competentes una vez interpuesto el presente medio de impugnación, **el procedimiento de búsqueda de la información se tiene por atendido.**

Sin embargo, del análisis que este Órgano Garante realiza a la respuesta emitida en atención al requerimiento que nos ocupa, se advierte que el mismo se colmó de manera parcial.

Se afirma lo anterior, ya que con relación a los inmuebles que la Secretaría de Movilidad tiene arrendados para sus usos, se advierte que aporta la liga electrónica siguiente: <https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/SMOV/art_92_xxxviii_d.web> , la cual remite al portal del IPOMEX del ente público en la fracción XXXVIII del artículo 92 de la Ley de Transparencia Local relativa al “inventario de bienes inmuebles” del ejercicio 2023, la cual consta de registros, de los cuales se desprenden los bienes inmuebles que el **Sujeto Obligado** tiene en arrendamiento, como se visualiza de las siguientes digitalizaciones:

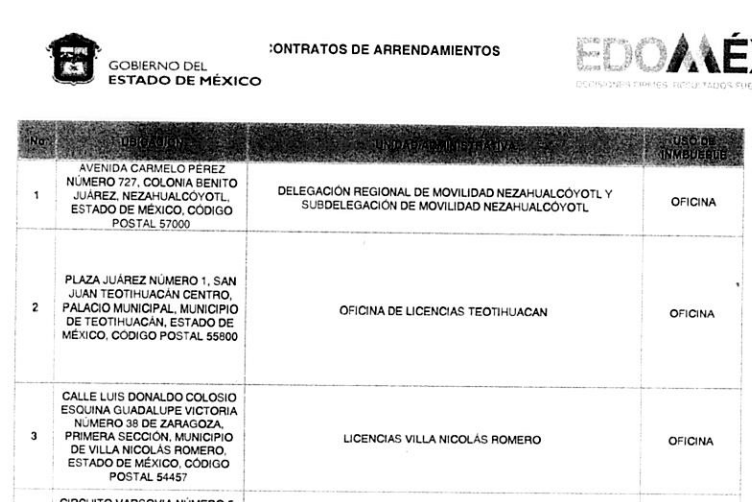
SIN TEXTO





De lo anterior, se logra advertir la información a la que desea acceder la persona solicitante, relativa a los inmuebles que tiene arrendados la Secretaría de Movilidad.

Asimismo, se advierte que el **Sujeto Obligado** aportó un listado de los 19 contratos de arrendamientos de inmuebles para uso de la Secretaría de Movilidad, y para referencia se inserta la siguiente digitalización:



De dicho listado, se advierte que se incluyen datos como la ubicación del inmueble, la unidad administrativa responsable del inmueble, así como el uso que se le da al mismo.

Sin embargo, en el requerimiento en análisis es de recordar que la persona solicitante también peticionó **la información acerca de los arrendadores de los inmuebles que posee en calidad de arrendamiento la Secretaría de Movilidad para sus usos.**

Información la anterior, que no aportó el **Sujeto Obligado,** y la cual de manera enunciativa más no limitativa pudiera obrar en los contratos de arrendamiento celebrados entre la Secretaría de Movilidad y los arrendadores de los inmuebles que tiene en posesión para sus usos; los cuales, como se analizó anteriormente constituyen una obligación de transparencia común de los entes públicos obligados de conformidad con el artículo 92, fracción XXIX de la Ley de Transparencia Local, al formar parte de la información sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, en este caso, relativo a los arrendamientos de inmuebles.

En ese sentido, si bien el **Sujeto Obligado** en un intento por reparar el agravio ocasionado en un inicio con su respuesta al indicar que no se habían encontrado registro alguno de lo solicitado, en informe remitió información sobre lo peticionado, en el caso no se colmó en su totalidad el requerimiento de mérito, ya que no se aportó la información de los arrendadores de los inmuebles que posee el ente público en arrendamiento.

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente** **no fue** **colmado** en su totalidad, pues la respuesta otorgada por el **servidor público habilitado competente** del ente público no agotó los principios de congruencia y exhaustividad, ya que no aportó la totalidad de la información, aun y cuando tiene competencia para contar con la misma.

En tal sentido, resulta aplicable el Criterio 02/17 emitido por el Peno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de título y texto siguientes:

***“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información,* ***la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado****; mientras que* ***la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados****. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

Por lo que, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente,** a criterio de este Órgano Garante, resulta dable ordenar se haga entrega de la siguiente información, de ser procedente en versión pública:

* El o los documentos donde conste la información relativa a los arrendadores de los inmuebles que posee bajo arrendamiento, conforme al listado de los contratos de arrendamiento remitidos en informe justificado.
  + - 1. **Cuántos contratos de personal tiene vía sistema de subcontratación conocido como Outsourcing desde el año 2022 y lo que se lleva hasta este momento, así como la empresa que hizo las contrataciones. (Sobre este requerimiento la persona solicitante requiere se entregue listado)**

En ese contexto, sobre la naturaleza de la información solicitada, es de indicar que, en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios no se contempla la figura de la subcontratación en esquema de outsourcing que refiere la parte **Recurrente**; sin embargo, sí establece una distinción de los trabajadores de acuerdo a la duración de sus relaciones de trabajo. Así, los artículos 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley citada establecen lo siguiente:

***ARTÍCULO 6.*** *Los servidores públicos se clasifican en generales y de confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de trabajo pueden ser: por tiempo u obra determinados o por tiempo indeterminado.*

***ARTÍCULO 12.*** *Son servidores públicos por tiempo indeterminado quienes sean nombrados con tal carácter en plazas presupuestales.*

***ARTÍCULO 13.*** *Son servidores públicos sujetos a una relación laboral por tiempo u obra determinados, aquéllos que presten sus servicios bajo esas condiciones, en razón de que la naturaleza del servicio así lo exija.*

***ARTÍCULO 14.*** *Sólo se podrá contratar la prestación de servicios por tiempo determinado en los siguientes casos:*

*I. Cuando tenga por objeto sustituir interinamente a un servidor público;*

*II. Cuando sea necesario realizar labores que se presentan en forma esporádica;*

*III. Cuando aumenten las cargas de trabajo o haya rezago y se establezca un programa especial para desahogarlo, o para apoyar programas de inversión.*

*El término máximo para el cual se podrá establecer una relación laboral por tiempo determinado será de un año ininterrumpidamente, excepto cuando se trate de sustituir interinamente a otro servidor público o tratándose de programas con cargo a recursos de inversión y en los casos de terminación o conclusión de la administración en la que fue contratado el servidor público a que se refiere el artículo 8 de esta ley.*

***ARTÍCULO 15.*** *Cuando se trate de una relación de trabajo por obra determinada, ésta durará hasta en tanto subsista la obra motivo del contrato.”*

Del articulado anterior se desprende que los trabajadores, de acuerdo a la duración de su relación laboral, se clasifican en trabajadores por tiempo indeterminado y trabajadores por tiempo u obra determinada. De tal forma que, coloquialmente, se suele identificar a los primeros como trabajadores de base y a los segundos como eventuales.

Así, el hecho de que en la normatividad de mérito no contemple el régimen de subcontratación, ello no impide a los entes públicos realizar la subcontratación de servicios y obras especializadas, dado que no hay norma establecida que lo prohíba.

Es de agregar que, si bien, conforme lo anterior, no existe obligación de que los entes públicos lleven a cabo el régimen de subcontratación de servicios, también lo es que, en el supuesto de que una empresa externa realice las contrataciones de personal eventual, esto no exime a los sujetos obligados de contar con la información relativa al personal que presta sus servicios en las unidades administrativas de su estructura orgánica, tal y como se estipula en el Criterio 12/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el que se observa lo siguiente:

***“Régimen de subcontratación por sujetos obligados.*** *Publicidad del nombre de los trabajadores contratados a través de. Los nombres de las personas físicas contratadas con recursos públicos, a través de una empresa de outsourcing, aun cuando no se trate de servidores públicos, reviste la naturaleza de información pública; lo anterior, siempre y cuando realicen actividades operativas y administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto, y que éstas se encuentren directamente relacionadas con las funciones propias que tienen los servidores públicos adscritos al mismo sujeto obligado.”*

Precisado lo anterior, sobre el requerimiento de nuestra atención, es de indicar que quien dio atención al mismo, no obstante que fue hasta informe justificado, fue la **Subdirectora de Administración de Capital Humano**, **quien indicó que no existe algún esquema de subcontratación conocido como Outsourcing en esa Secretaría.**

Así, en principio es de indicar que la **Subdirección de Administración de Capital Humano,** conforme el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad, tiene dentro de sus funciones, ***validar y supervisar la plantilla de personal de las unidades administrativas de la Secretaría,*** como se sigue:

*“22000002000300S SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO*

*[…]*

*FUNCIONES:*

*[…]*

*-Validar y supervisar la plantilla de personal de las unidades administrativas de la Secretaría.*

*[…]”*

De esta manera, es que la unidad administrativa que dio atención al requerimiento de mérito fue la competente, cumpliéndose así el procedimiento para la atención a las solicitudes de acceso a la información, establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, anteriormente analizado.

De esta manera, atendiendo que hubo pronunciamiento de la servidor público habilitada competente, la cual indico que no existía algún esquema de subcontratación conocido como Outsourcing en esa Secretaría, se considera que se colma el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente**, pues conforme lo anteriormente esgrimido no constituye una obligación de los entes públicos de llevar a cabo el régimen de subcontratación.

Por lo tanto, no se trata de un caso por el cual la negación del hecho implique la afirmación del mismo, simplemente se está ante una notoria y evidente inexistencia fáctica de la información solicitada.

Encontrándonos ante un hecho negativo, destacando entonces que el Pleno de este Organismo Garante, ha sostenido que ante la presencia de un hecho negativo, resultaría innecesaria una declaratoria de inexistencia en términos de los artículos 19, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y ante una hecho negativo resulta aplicable la siguiente tesis:

***HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN.***

*Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por que invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.*

*Amparo en revisión 2022/61. José García Florín (Menor). 9 de octubre de 1961. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.”*

Además, y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, anteriormente invocado **el** **Sujeto Obligado** sólo proporcionará la información que obra en sus archivos, lo que a *contrario sensu* significa que no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos; motivo por el cual se colma el derecho de acceso a la información pública de la persona solicitante.

Máxime que este Organismo Garante no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición de los solicitantes; situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto máxime que al momento que ponen a disposición ésta, la misma tiene el carácter oficial y se presume veraz, tan es así que la misma queda registrada en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

Sirviendo de apoyo a lo anterior por analogía, el criterio 31-10 emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice:

*El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.*

* + - 1. **Con cuantos vehículos cuenta y agregar lista de los mismos; cuántos de ellos son propios y cuántos están bajo el esquema de arrendamiento, y de estos últimos indicar la empresa o empresas que prestan el servicio del arrendamiento.**

Sobre el requerimiento de mérito, resulta procedente tomar en cuenta el análisis de la naturaleza de la información realizada sobre el **requerimiento marcado bajo el numeral 1**, dado que en el caso se trata de bienes muebles -vehículos- cuya adquisición o arrendamiento por parte de la Secretaría de Movilidad, también debe realizarse bajo los procedimientos regulados por la Ley de la de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y su Reglamento.

Aunado a que, los documentos donde pudiera obrar de manera enunciativa más no limitativa lo peticionado por la parte solicitante, se encuentra relacionada con dos obligaciones de transparencia comunes, las previstas en las fracciones XXIX y XXXVIII del artículo 92 de la Ley de Transparencia Local, relativas a: los **procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados; así como, al inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;** mismas que también fueron analizadas anteriormente, respecto del **requerimiento marcado bajo el numeral 1.**

De esta manera, atendiendo la naturaleza de la información peticionada en el requerimiento de nuestra atención, conviene indicar que quien se pronunció sobre lo solicitado fue la **Subdirección de Servicios Generales:** unidad administrativa que conforme el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad vigente, tiene como, con relación a lo requerido en este apartado, tiene dentro de sus funciones la siguiente:

***22000002000500S SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES***

*[…]*

***FUNCIONES:***

*[…]*

*-* ***Resguardar y mantener actualizados los expedientes del parque vehicular asignados a las unidades administrativas de la Secretaría.***

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

Como se desprende de lo anterior, la **Subdirección de Servicios Generales** tiene dentro de sus funciones **resguardar y mantener actualizados los expedientes del parque vehicular asignados a las unidades administrativas de la Secretaría.**

Aunado a que, atendiendo a que la solicitud de información fue turnada a la **Coordinación Administrativa**, de quien depende la Subdirección que dio respuesta al requerimiento que nos ocupa, es necesario indicar que dicha coordinación, tiene dentro de sus atribuciones la siguiente conforme el referido Manual General de Organización:

***22000002000000S COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA***

*[…]*

***FUNCIONES:***

***-Participar en los Comités de Adquisiciones y Servicios y de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones que integre la Secretaría de Finanzas.***

*[…]*

*-****Coordinar la administración de los bienes muebles e inmuebles destinados a la Secretaría.***

*[…]”*

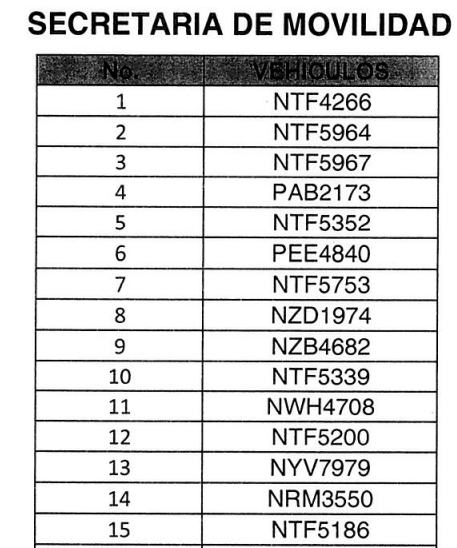
*(Énfasis añadido)*

En virtud de lo anterior, se tiene que en el caso concreto, se dio cabal cumplimiento con el requisito de turnar la solicitud de información al área competente que puede poseer, generar y/o administrar la información requerida; cumpliéndose así el procedimiento para la atención a las solicitudes de acceso a la información, establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, anteriormente analizado.

En el caso se desprende que la Unidad de Transparencia, no obstante que turnó la solicitud de información a las áreas competentes una vez interpuesto el presente medio de impugnación, **el procedimiento de búsqueda de la información se tiene por atendido.**

Sin embargo, del análisis que este Órgano Garante realiza a la respuesta emitida en atención al requerimiento que nos ocupa, se advierte que el mismo se colmó de manera parcial.

Se afirma lo anterior, ya que con relación al número de vehículos con los que cuenta y el listado de los mismos, se desprende que el ente público entregó un listado de los 30 vehículos que conforman la plantilla vehicular de la Secretaría de Movilidad:



[…]”

Asimismo, con relación a los vehículos que están bajo el esquema de arrendamiento se indicó que los mismos se encuentran como información pública, registro 279 año 2021, en la siguiente liga: <https://ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/FINANZAS.web>, es de indicar que de la consulta que hizo este Instituto a la liga de mérito, la misma dirige al portal principal del IPOMEX de la Secretaría de Finanzas, más no así a lo peticionado por la persona solicitante como se muestra de la siguiente digitalización:



Por lo que, a consideración de este Órgano Garante, con la entrega de la liga electrónica indicada no se colma la solicitud de información.

Se afirma lo anterior, pues como se pudo apreciar, dicha liga electrónica, no direcciona a los vehículos que están bajo el esquema de arrendamiento.

De modo que, es importante traer a colación que el artículo 161de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipiosestablece las características que debe tener la información desde el momento de su generación, publicación y entrega; de igual manera se contempla el procedimiento a seguir por el sujeto obligado para informar a los solicitantes sobre información que se encuentre disponible en libros, compendios, formatos electrónicos, entre otros, haciéndole saber al solicitante como podrá consultar, reproducir o adquirir la información, **en un plazo no mayor a cinco días hábiles**, comprendiendo:

a) La fuente

b) El lugar y

c) La forma

Asimismo, se establece que la fuente de la información deberá ser:

a) Precisa

b) Concreta

**c) Y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.**

Imperativos legales que detallan el procedimiento que debe seguir el **Sujeto Obligado** para que pueda tomarse como válida su orientación sobre la forma en que puede consultar la información requerida.

Dicho esto, se tiene que, respecto a la información que la persona Solicitante requirió, la liga electrónica que proporcionó el **Sujeto Obligado,** no direcciona a los vehículos que están bajo el esquema de arrendamiento**,** por el contrario, implica que la persona solicitante tenga que realizar una búsqueda en la página proporcionada, aunado a que la misma corresponde a otro ente público; por lo que, se determina que el **Sujeto Obligado** no observó lo que dispone el artículo 161 de la Ley en la materia.

Además, es menester indicar que, respecto de lo requerido sobre el número de vehículos que son propios de la Secretaría de Movilidad y los que son arrendados, dicha información puede obrar de manera enunciativa más no limitativa en el inventario de bienes muebles en posesión o en propiedad del **Sujeto Obligado,** que constituye una obligación de transparencia común.

Incluso, en los propios Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia establecen lo siguiente respecto al inventario de bienes muebles o inmuebles en posesión o propiedad de Sujetos Obligados, respecto de los bienes muebles, se deben registrar, entre otros, los vehículos al servicio de los sujetos obligados, como se muestra:

*“****XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad***

*[…]*

***Respecto de los bienes muebles se registrará*** *tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo****– como los vehículos*** *y demás bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.”*

*(Énfasis añadido)*

De igual forma, lo relacionado a la denominación o razón social de la empresa o empresas que prestaron el servicio de arrendamiento de los vehículos en posesión de la Secretaría de Movilidad, a fin de conocer las personas morales que dieron en arrendamiento al **Sujeto Obligado** vehículos que forman parte de su platilla del parque vehicular, la misma puede obrar de manera enunciativa más no limitativa en los contratos de arrendamiento celebrados entre la Secretaría de Movilidad y los arrendadores –personas morales- de los vehículos que tiene en posesión; contratos que, como se analizó anteriormente constituyen una obligación de transparencia común de los entes públicos obligados de conformidad con el artículo 92, fracción XXIX de la Ley de Transparencia Local, al formar parte de la información sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, en este caso, relativo a la adquisición o arrendamiento de bienes muebles.

En ese sentido, si bien el **Sujeto Obligado** en un intento por reparar el agravio ocasionado en un inicio con su respuesta al indicar que no se habían encontrado registro alguno de lo solicitado, en informe remitió información sobre lo peticionado, no obstante, en el caso no se colmó en su totalidad el requerimiento de mérito, ya que no se aportó la información relativa al número de los vehículos que son propiedad de la Secretaría de Movilidad y los que se encuentran bajo el esquema de arrendamiento, así como la denominación o razón social de las personas morales en su carácter de arrendadoras de los vehículos que se encuentran en posesión del ente público.

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente** **no fue** **colmado** en su totalidad, pues la respuesta otorgada por el **servidor público habilitado competente** del ente público no agotó los principios de congruencia y exhaustividad, ya que no aportó la totalidad de la información, aun y cuando tiene competencia para contar con la misma, siendo aplicable el Criterio 02/17 emitido por el Peno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, anteriormente citado.

Por lo que, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente,** a criterio de este Órgano Garante, resulta dable ordenar al **Sujeto Obligado** haga entrega, de ser procedente en versión pública, con actualización a la fecha de la solicitud, esto es, al siete de agosto de dos mil veintitrés, del o los documentos donde conste lo siguiente:

* La información relativa al número de los vehículos que son de su propiedad y los que se encuentran bajo el esquema de arrendamiento.
* La denominación o razón social de las personas morales arrendadoras de los vehículos que se encuentran bajo el esquema de arrendamiento.
  + - 1. **De los equipos de cómputo, impresoras y multifuncionales con los que cuenta, ¿Cuántos son propios y cuántos arrendados? y sobre estos últimos, señalar la empresa o empresas que prestan el servicio del arrendamiento.**

Sobre el requerimiento de mérito, también resulta procedente tomar en cuenta el análisis de la naturaleza de la información realizada sobre el **requerimiento marcado bajo el numeral 1**, dado que en el caso se trata de bienes muebles –equipo de cómputo, impresoras y multifuncionales- cuya adquisición o arrendamiento por parte de la Secretaría de Movilidad, también debe realizarse bajo los procedimientos regulados por la Ley de la de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y su Reglamento.

Aunado a que, los documentos donde pudiera obrar de manera enunciativa más no limitativa lo peticionado por la parte solicitante, se encuentra relacionada con dos obligaciones de transparencia comunes, las previstas en las fracciones XXIX y XXXVIII del artículo 92 de la Ley de Transparencia Local, relativas a: los **procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados; así como, al inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;** mismas que también fueron analizadas anteriormente, respecto del **requerimiento marcado bajo el numeral 1.**

De esta manera, atendiendo la naturaleza de la información peticionada en el requerimiento de nuestra atención, conviene indicar que quien se pronunció sobre lo solicitado fue el **Jefe del Departamento de Adquisiciones, Control y Suministro de Bienes:** unidad administrativa que conforme el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad vigente, tiene como, con relación a lo requerido en este apartado, tiene dentro de sus funciones la siguiente:

***“22000002000401S DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTROL Y SUMINISTRO DE BIENES***

*[…]*

***FUNCIONES:***

*[…]*

*-****Suscribir en carácter de unidad requirente y/o usuaria contratos pedidos derivados de procedimientos de adquisición de bienes*** *y/o contratación de servicios, así como dar seguimiento a los mismos.*

*[…]*

***-Conservar los registros actualizados sobre las enajenaciones, arrendamientos, adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, así como implementar medidas para su control y seguimiento.***

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

Como se desprende de lo anterior, el **Departamento de Adquisiciones, Control y Suministro de Bienes** tiene dentro de sus funciones **suscribir en carácter de unidad requirente y/o usuaria contratos pedidos derivados de procedimientos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios; así como, conservar los registros actualizados sobre las adquisiciones y arrendamientos.**

Aunado a que, atendiendo a que la solicitud de información fue turnada a la **Coordinación Administrativa**, de quien depende el Departamento que dio respuesta al requerimiento que nos ocupa, es necesario indicar que dicha coordinación, tiene dentro de sus atribuciones la siguiente conforme el referido Manual General de Organización:

***22000002000000S COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA***

*[…]*

***FUNCIONES:***

***-Participar en los Comités de Adquisiciones y Servicios y de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones que integre la Secretaría de Finanzas.***

*[…]*

*-****Coordinar la administración de los bienes muebles e inmuebles destinados a la Secretaría.***

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

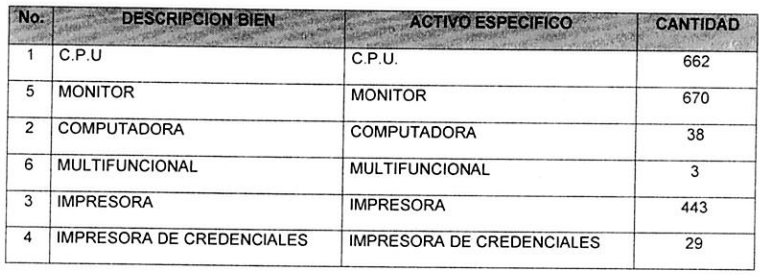
En virtud de lo anterior, se tiene que en el caso concreto, se dio cabal cumplimiento con el requisito de turnar la solicitud de información al área competente que puede poseer, generar y/o administrar la información requerida; cumpliéndose así el procedimiento para la atención a las solicitudes de acceso a la información, establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, anteriormente analizado.

En el caso se desprende que la Unidad de Transparencia, no obstante que turnó la solicitud de información a las áreas competentes una vez interpuesto el presente medio de impugnación, **el procedimiento de búsqueda de la información se tiene por atendido.**

Sin embargo, del análisis que este Órgano Garante realiza a la respuesta emitida en atención al requerimiento que nos ocupa, se advierte que el mismo se colmó de manera parcial.

Se afirma lo anterior, ya que de la información aportada por el servidor público habilitado competente, se desprende que sólo entregó un listado con los bienes informáticos propios de la Secretaría de Movilidad, indicando que no puede atender lo relativo a los arrendados, sin precisar si se cuenta o no con bienes arrendados.

Listado que para mayor referencia se inserta:



En ese sentido, si bien se aporta, entre otros, el número de computadoras, impresoras y multifuncionales propios con los que cuenta la Secretaría de Movilidad, en el caso la unidad administrativa competente, no obstante de que tiene atribuciones para conocer si a la fecha de la solicitud cuenta dicho ente público con dichos activos en esquema de arrendamiento, únicamente se limitó en señalar que no se atendía lo relativo a los bienes informáticos arrendados, lo que conlleva a que no pueda tener por colmado el requerimiento de mérito.

Además, es menester indicar que, lo relativo al número de bienes informáticos (equipos de cómputo, impresoras y multifuncionales) arrendados, dicha información puede obrar de manera enunciativa más no limitativa en el inventario de bienes muebles en posesión del **Sujeto Obligado,** que constituye una obligación de transparencia común.

Incluso, en los propios Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia establecen lo siguiente respecto al inventario de bienes muebles o inmuebles en posesión o propiedad de Sujetos Obligados, respecto de los bienes muebles, se deben registrar, entre otros, el equipo de cómputo al servicio de los sujetos obligados, como se muestra:

*“****XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad***

*[…]*

***Respecto de los bienes muebles se registrará*** *tanto el mobiliario y* ***equipo –incluido el de cómputo****– como los vehículos y demás bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.”*

*(Énfasis añadido)*

De igual forma, lo relacionado a la denominación o razón social de la empresa o empresas que arrendaron equipos de cómputo, impresoras y multifuncionales a la Secretaría de Movilidad, dicha información puede obrar de manera enunciativa más no limitativa en los contratos de arrendamiento celebrados entre la Secretaría de Movilidad y los arrendadores –personas morales- de dichos bienes informáticos que tiene en posesión; contratos que, como se analizó anteriormente constituyen una obligación de transparencia común de los entes públicos obligados de conformidad con el artículo 92, fracción XXIX de la Ley de Transparencia Local, al formar parte de la información sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, en este caso, relativo al arrendamiento de bienes muebles.

En ese sentido, como se ha indicado, si bien el **Sujeto Obligado** en un intento por reparar el agravio ocasionado en un inicio con su respuesta, en informe remitió información sobre lo peticionado, en el caso no se colmó en su totalidad el requerimiento de mérito, ya que no se aportó la información relativa al número de bienes informáticos (equipos de cómputo, impresoras y multifuncionales) arrendados, así como la denominación o razón social de la empresa o empresas que arrendaron los mismos al ente público.

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente** **no fue** **colmado** en su totalidad, pues la respuesta otorgada por el **servidor público habilitado competente** del ente público no agotó los principios de congruencia y exhaustividad, ya que no aportó la totalidad de la información, aun y cuando tiene competencia para contar con la misma, siendo aplicable el Criterio 02/17 emitido por el Peno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, anteriormente citado.

Por lo que, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente,** a criterio de este Órgano Garante, resulta dable ordenar al **Sujeto Obligado** haga entrega, de ser procedente en versión pública, con actualización a la fecha de la solicitud, esto es, al siete de agosto de dos mil veintitrés, del o los documentos donde conste lo siguiente:

* La información relativa al número de bienes informáticos (equipos de cómputo, impresoras y multifuncionales) que se encuentran bajo el esquema de arrendamiento.
* La denominación o razón social de las personas morales arrendadoras de los bienes informáticos señalados en el punto anterior.
  + - 1. **El capítulo 4000 del presupuesto de ingresos y egresos de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.**

Sobre el requerimiento de nuestra atención, resulta oportuno contextualizar la naturaleza de la información solicitada, y para ello es conveniente traer a contexto el contenido, en la parte de nuestro interés de los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de México de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023:

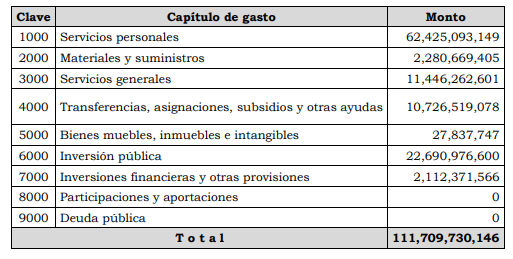
Presupuesto de egresos 2021:

*“****Artículo 14. Las erogaciones previstas en el Poder Ejecutivo para el gasto corriente y de inversión de las dependencias, en su clasificación administrativa, ascienden a la cantidad de $111,709,730,146 de los cuales $105,671,497,955 se encuentran asignados a las Dependencias y se distribuyen de la siguiente manera:***

**

*[…]*

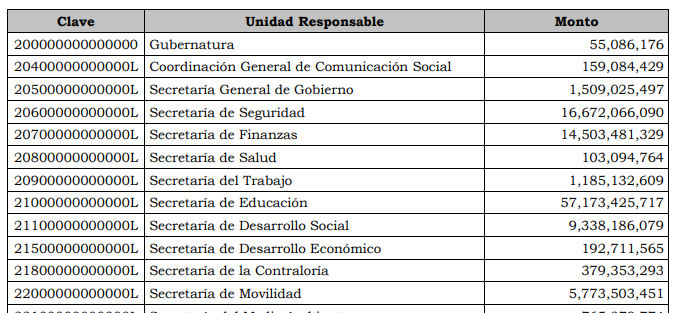
***“Artículo 15. Las erogaciones previstas en el artículo anterior se distribuyen en la clasificación económica de la siguiente forma:***

**

*”*

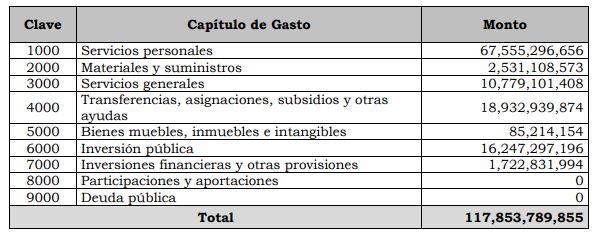
Presupuesto de egresos 2022:

*“****Artículo 15. Las erogaciones previstas en el Poder Ejecutivo para el gasto corriente y de inversión de las dependencias, en su clasificación administrativa, ascienden a la cantidad de $117,853,789,855, y se distribuyen de la siguiente manera:***

**

*[…]*

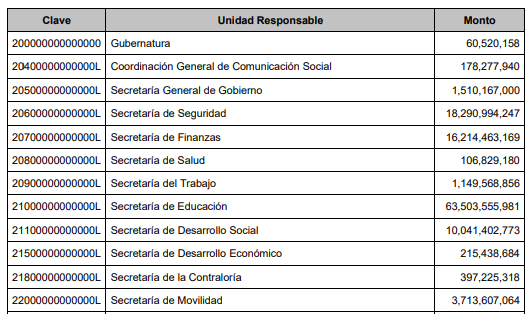
***“Artículo 16. Las erogaciones previstas en el artículo anterior se distribuyen en la clasificación económica de la siguiente forma:***

**

*”*

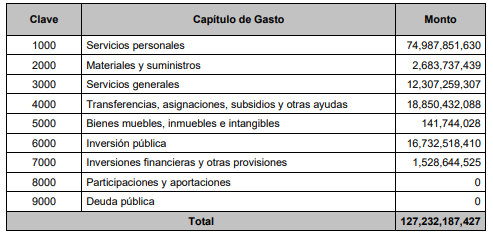
Presupuesto de egresos 2023:

*“****Artículo 15. Las erogaciones previstas para el Poder Ejecutivo por concepto de Gasto Corriente y de Inversión de las Dependencias, en su Clasificación Administrativa, ascienden a la cantidad de $127,232,187,427 y se distribuyen de la siguiente manera:***

**

*[…]*

***“Artículo 16. Las erogaciones previstas en el artículo anterior se distribuyen en la Clasificación Económica de la siguiente forma:***

**

*”*

Como se desprende de lo anterior, las erogaciones previstas en el Poder Ejecutivo para el gasto corriente y de inversión de las dependencias, se distribuyen bajo un esquema de clasificación económica, bajo una clave, unidad responsable –dependencia de la administración pública estatal- y monto –presupuesto asignado para el ejercicio fiscal-

De esta manera, el presupuesto de egresos de la entidad se puede clasificar en ramos autónomos, administrativos y generales, los cuales se integran por unidades responsables que se pueden desagregar en capítulos y conceptos de bancos.

Por lo que, este tipo de información permite exponer el presupuesto de egresos de la entidad para el ejercicio fiscal correspondiente en el máximo nivel de desagregación existente, debido a que las unidades responsables – las dependencias de la administración pública estatal, como lo es la Secretaría de Movilidad-, que componen cada uno de los ramos se descomponen en capítulos y concepto de gasto.

En ese sentido, las erogaciones o bien el presupuesto asignado a cada unidad responsable, se distribuyen bajo una Clasificación Económica que se compone por capítulos de gasto, encontrándose dentro de ellos, el 4000 relativo a “***Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas***”.

A mayor abundamiento, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica), del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2009, con última reforma el 22 de diciembre de 2014, la estructura del Clasificador por Objeto del Gasto se diseñó con un nivel de desagregación que permite que las cuentas del ente público faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económica-financiera, **considerándose el capítulo, como el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.**

Así, conforme el Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica), del CONAC, el Capítulo 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” de los entes públicos, es relativo a las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

Por lo que, como se puede desprender de lo anterior, el capítulo 4000 al que pretende acceder la persona solicitante de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, pertenece al presupuesto de egresos aprobado para dichos ejercicios, más no así a los presupuestos de ingresos, pues el presupuesto asignado a los entes públicos, se distribuyen, bajo una clasificación económica, es decir por objeto del gasto, entre otros, a través de dicho capítulo 4000.

En tal sentido, se colige que la información a la que pretende acceder la persona solicitante se encuentra al encontrarse relacionada con el presupuesto de egresos asignado a la Secretaría de Movilidad, por ende se trata de información de naturaleza pública que el **Sujeto Obligado** se encuentra constreñido a transparentar.

Ahora, por cuanto hace a la competencia del ente público, para poseer, generar y/o administrar la información requerida, **es de recordar que quien dio atención al requerimiento de mérito,** no obstante que fue hasta informe justificado, **fue el servidor público habilitado de la Subdirección de Finanzas, dependiente de la Coordinación Administrativa;** unidad administrativa que conforme el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad vigente, tiene como objetivo y dentro de sus atribuciones, con relación a lo requerido en este apartado, las siguientes:

*“22000002000100S SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS*

*[…]*

*FUNCIONES:*

*-****Vigilar y controlar que los recursos presupuestales****, así como los bienes y valores de la Secretaría, se manejen en forma adecuada y racional.*

*-Coordinar la integración del anteproyecto anual de presupuesto de egresos en colaboración con las unidades administrativas y la Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas, para someterlo a la revisión del o la Titular de la Coordinación Administrativa y remitirlo a la instancia normativa.*

*-Supervisar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado a la Secretaría, de conformidad con la normatividad, sistemas, procedimientos y disposiciones establecidas por la Secretaría de Finanzas.*

*[…]”*

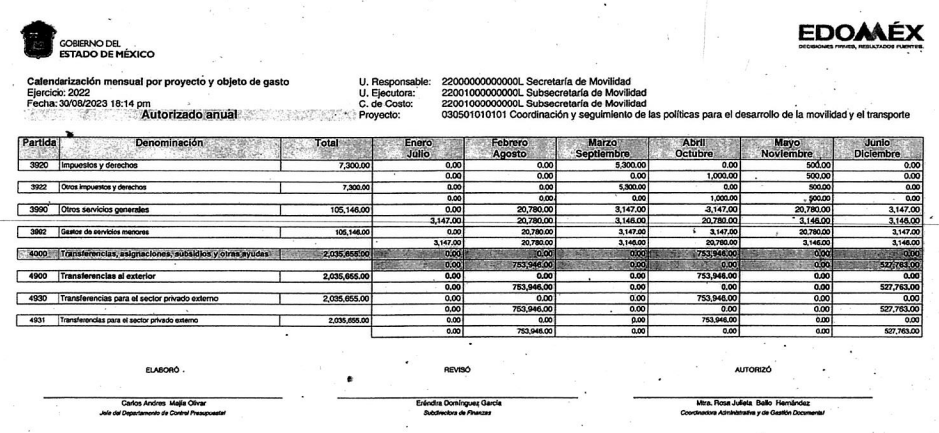
Como se desprende de lo anterior, la Subdirección de Finanzas tiene dentro de sus funciones: vigilar y controlar que los recursos presupuestales; coordinar la integración del anteproyecto anual de presupuesto de egresos en colaboración con las unidades administrativas y la Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación de la Secretaría; así como, supervisar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado a la Secretaría.

En virtud de lo anterior, se tiene que en el caso concreto, se dio cabal cumplimiento con el requisito de turnar la solicitud de información al área competente que puede poseer, generar y/o administrar la información requerida; cumpliéndose así el procedimiento para la atención a las solicitudes de acceso a la información, establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, anteriormente analizado.

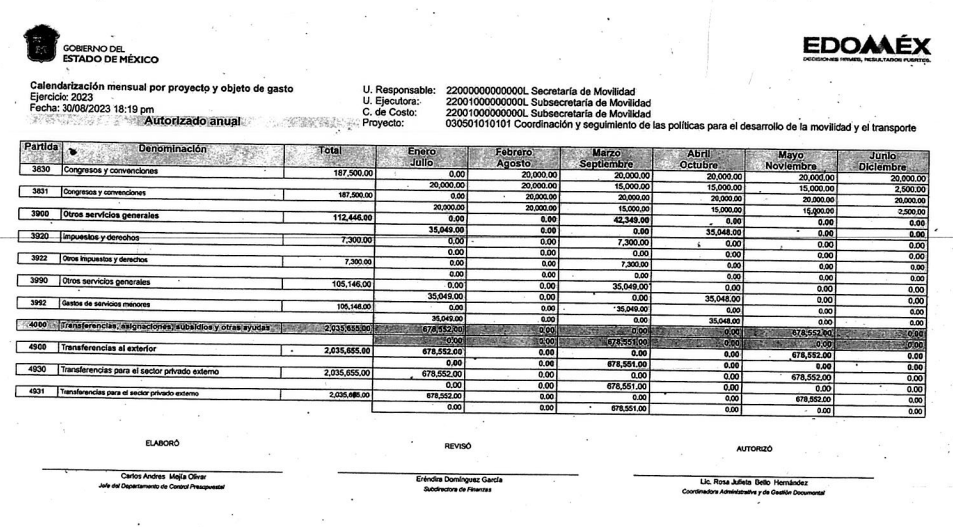
Lo anterior, pues aunque la Unidad de Transparencia turnó la solicitud de información a las áreas competentes una vez interpuesto el presente medio de impugnación, **el procedimiento de búsqueda de la información se tiene por atendido.**

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta otorgada sobre el requerimiento en análisis del servidor público habilitado competente, se advierte que el mismo entregó tres documentos denominados “Calendarización mensual por proyecto y objeto de gasto” de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 de la Secretaría de Movilidad, en los que se logra advertir, por cuanto hace a los relativos a los ejercicios 2022 y 2023, el presupuesto asignado al capítulo 4000 relativo a “***Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas***”, como se muestra a continuación:

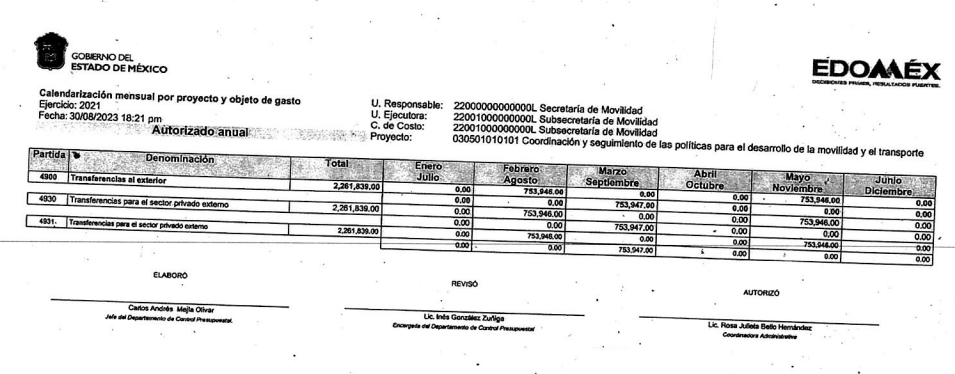
2022:



2023:



Sin embargo, para el caso del ejercicio 2021, el documento denominado “Calendarización mensual por proyecto y objeto de gasto”, no refleja el presupuesto asignado para dicho capítulo en el ejercicio indicado, como se muestra:



De lo anterior, que se advierta un cumplimiento parcial al requerimiento de mérito, no obstante que, para el ejercicio fiscal 2021, conforme el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal indicado, el presupuesto asignado a la Secretaría de Movilidad se distribuiría, entre otros, en el capítulo de gasto 4000 “***Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas***”; información que puede obrar de manera enunciativa más no limitativa en el formato denominado “Calendarización mensual por proyecto y objeto de gasto” sobre el capítulo de mérito.

Por lo tanto, el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente** **no fue** **colmado** en su totalidad, pues la respuesta otorgada por el **servidor público habilitado competente** del ente público no agotó los principios de congruencia y exhaustividad, ya que no aportó la totalidad de la información, aun y cuando tiene competencia para contar con la misma, siendo aplicable el Criterio 02/17 emitido por el Peno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, anteriormente citado.

Por lo que, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente,** a criterio de este Órgano Garante, resulta dable ordenar al **Sujeto Obligado** haga entrega, de lo siguiente:

* El documento donde conste el presupuesto asignado al capítulo de gasto 4000 “*Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*”, del ejercicio fiscal 2021.

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** esgrimidos en su recurso de revisión **04834/INFOEM/IP/RR/2023** devienen parcialmente **fundados**, siendo procedente **Revocar** la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** y ordenar la entrega de la información precisada en cada apartado, y de ser procedente en versión pública en los casos que proceda.

**Quinto. Versión Pública.** Finalmente, debe señalarse que en el presente caso, en algunos de los documentos que deben ser entregados obran datos susceptibles de ser clasificados, en términos de la fracción I del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que, elSujeto Obligado deberá hacer la elaboración de la versión pública de los mismos a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información pública de laparte Recurrente sin menoscabo al derecho a la protección de los datos personales de terceros.

Para efectos de la elaboración de la versión pública se deberá observar lo dispuesto por los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91, 132 fracciones II y III, y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

*“****Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*[…]*

***IX. Datos personales****: La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada****: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial****: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública****: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*[…]*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132****. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*[…]*

***Artículo 143.*** *Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública.”*

Igualmente, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día quince de abril de dos mil dieciséis, tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Entorno a lo que aquí nos interesa, los Lineamientos Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo sexto.*** *La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia*

***Quincuagésimo séptimo.*** *Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I.*** *La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los servidores públicos en los documentos, y sus firmas autógrafas, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III.*** *La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma.”*

En el caso específico, en los documentos que se determinan ordenar, como son los que se encuentran relacionados con **procedimientos de adquisición o arrendamiento**, existen datos que son susceptibles de ser clasificados como confidenciales y otros cuya naturaleza es pública, los cuales son los siguientes:

**Clave de elector**, es la composición alfanumérica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a una persona física, que se conforma por las primeras letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su titular, así como una homoclave que distingue a su titular de cualquier otro homónimo, por lo tanto, se trata de un dato personal que debe ser protegido.

**Número de OCR**, denominado Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), contiene el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento, por lo que constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a una persona física identificada o identificable en función de la información geoelectoral ahí contenida, **por lo que es susceptible de resguardarse.**

1. **Clave Única de Registro de Población**,se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo está considerada como **información confidencial.**
2. **Número de cuenta bancaria** **de las personas físicas** es información que sólo su titular o personas autorizadas poseen para el acceso o consulta de información patrimonial, o para la realización de operaciones bancarias de diversa naturaleza, por lo que la difusión pública del mismo facilitaría la afectación al patrimonio del titular de la cuenta. Por lo anterior, el número de cuenta bancaria **debe ser clasificado como confidencial con fundamento en las fracciones I y II del artículo 143 de la Ley de la Materia de la Entidad; en razón de que, con su difusión se estaría poniendo en riesgo la seguridad de su titular**.

Además de que, la publicidad de los números de cuenta bancaria de los particulares en nada contribuye a la rendición de cuentas, sino por el contrario, dar a conocer los números de las cuentas bancarias hace vulnerable a las personas físicas, al abrir la posibilidad de que terceros que cuenten con las posibilidades tecnológicas y/o económicas puedan realizar actos ilícitos mediante operaciones cibernéticas; en esa virtud, este Instituto determina que dicha información no puede ser del dominio público, toda vez que se podría dar un uso inadecuado a la misma o cometer algún ilícito o fraude en contra del patrimonio de los particulares.

En esa virtud, este Pleno determina que dicha información no puede ser del dominio público, toda vez que se podría dar un uso inadecuado a la misma o cometer algún ilícito o fraude como ya ha sido expuesto.

Es por esta razón que se debe omitir el o los números de cuentas bancarias de particulares en las versiones públicas que del contrato y la o las facturas se hagan, para ser entregadas.

Lo anterior, no es así tratándose de las cuentas bancarias o claves interbancarias de los Sujetos Obligados ya que su publicidad cede a la rendición de cuentas al transparentar la forma en que son administrados los recursos públicos.

Lo argumentado encuentra sustento en los criterios 10/17 y 11/17 emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que llevan por rubro y texto los siguientes:

***“Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas.****El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

***Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de sujetos obligados que reciben y/o transfieren recursos públicos, son información pública****. La difusión de las cuentas bancarias y claves interbancarias pertenecientes a un sujeto obligado favorece la rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administran los recursos públicos, razón por la cual no pueden considerarse como información clasificada.”*

1. **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** y **el domicilio fiscal** si bien este Instituto ha sostenido que el RFC y domicilio de las personas físicas debe ser testado por los Sujetos Obligados, en las versiones públicas de los documentos que elaboren para atender las solicitudes de información pública, lo cierto es que, tratándose de proveedores, prestadores de servicios o contratistas, dichos datos no deben ser suprimidos de las facturas y contratos que vayan a ser entregados. Ello se debe a que, del ejercicio de ponderación entre el derecho a la protección de datos personales con el derecho de acceso a la información pública, es de mayor trascendencia el que cualquier persona pueda conocer en qué se gastan los recursos públicos, puesto que se trata de erogaciones que realiza un órgano del Estado con base en los recursos que encuentran su origen en mayor medida en las contribuciones aportados por los gobernados, por lo que debe transparentarse su ejercicio. Además, las personas físicas que realicen las actividades contratadas por las instituciones, renuncian implícitamente a una parte de su derecho a la intimidad al obtener beneficios y lucros de los recursos públicos por dicha contratación, por lo que **no puede considerarse como información clasificada lo relativo a su nombre, registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal**, atento a que dicha información es la que puede generar certeza en los gobernados en que se está ejerciendo debidamente el presupuesto.

Robustece lo anterior el criterio orientador 04/21 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el cual refiere:

***“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas proveedoras o contratistas.*** *El RFC de contratistas o proveedores de los sujetos obligados debe ser público, ya que al tratarse de personas con contrataciones públicas, su difusión favorece la transparencia con la que deben administrarse los recursos públicos, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”*

1. **Nombre de las personas físicas** o los **representantes legales de las personas morales**, en su calidad de proveedores, contratistas o prestadores de servicios, y la firma y rúbrica de estos, que participen en algún proceso de adjudicación en cualquiera de sus modalidades, debe mencionarse que con base en el artículo 23 párrafo segundo y 24 fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los entes públicos tienen la obligación de difundir toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos, motivo por el cual los datos del representante legal de la persona moral que resultó favorecida con el procedimiento de licitación no conservan el carácter de confidencial y por **tanto no deben ser testados.**

Asimismo, se destaca que la versión pública que elabore el **Sujeto Obligado** debe cumplir con las formalidades exigidas en la Ley, por lo que para tal efecto emitirá el Acuerdo del Comité de Transparencia en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que le llevaron a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no señalar las razones por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones de ello se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante, por lo que el acuerdo respectivo, deberá hacerse del conocimiento de laparteRecurrente.

Entorno a lo que aquí nos interesa, el Lineamiento Quincuagésimo segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establece lo siguiente:

***“Quincuagésimo segundo****. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso especifico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I.*** *Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;*

***II.*** *Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y*

***III.*** *Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.*

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información confidencial.”*

Deberá observar el Lineamiento Quincuagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información supraindicados, que establece los formatos para la clasificación de los documentos, conforme a lo siguiente:

***CAPÍTULO VIII***

***DE LOS ELEMENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN***

*Quincuagésimo tercero. El formato para señalar la clasificación de un documento o expediente que contenga información reservada, es el siguiente:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | **Dónde** |
| **Sello oficial o logotipo del sujeto obligado** | Fecha de clasificación | Se anotará la fecha en la que el Comité de Transparencia confirmó la clasificación del documento o expediente, en su caso. |
| Área | Se señalará el nombre del área del cual es titular quien clasifica. |
| Información Reservada | Se indicarán las partes o páginas del documento que se clasifican como reservadas, o, en su caso, se precisará que se ha reservado el documento o expediente en su totalidad. |
| Periodo de Reserva | Se anotará el número de años o meses por los que se mantendrá reservado el documento, el expediente o, en su caso, las partes o secciones reservadas. |
| Fundamento legal | Se señalará el nombre del ordenamiento el o los artículos, fracciones, párrafos con base en los cuales se sustente la reserva. |
| Ampliación del periodo de reserva | En caso de haber solicitado la ampliación del periodo de reserva originalmente establecido, se deberá anotar el número de años o meses por los que se amplía la reserva. |
| Rúbrica del titular del área | | Rúbrica autógrafa o firma digital de quien clasifica. |
| Fecha de desclasificación | | Se anotará la fecha en que se desclasifica el documento. |
| Rúbrica y cargo del servidor público | | Rúbrica autógrafa o firma digital de quien desclasifica. |

*Los documentos que integren un expediente reservado en su totalidad no deberán marcarse en lo individual.*

*Una vez desclasificados los expedientes, si existieren documentos que tuvieran el carácter de reservados deberán permanecer o ser marcados*

Asimismo, deberá observar los Lineamientos Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo sexto****. Cuando la elaboración de la versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, genere costos por reproducción por derivar de una solicitud de información o determinación de una autoridad competente, ésta será elaborada hasta que se haya acreditado el pago correspondiente.*

***Quincuagésimo séptimo****. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I****. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III****. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma.”*

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al Sujeto Obligado a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186, fracción III, así como 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E:**

**Primero.** Resultan **parcialmente** **fundadas** lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el Recurso de Revisión **04834/INFOEM/IP/RR/2023;** por lo que, en términos del Considerando **Cuarto** de la presente resolución se **Revoca** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **ordena** al **Sujeto Obligado** que, en términos de los Considerandos **Cuarto** y **Quinto**, haga entrega vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, de ser procedente en versión pública, los documentos en donde conste lo siguiente:

**Los arrendadores de los inmuebles que posee bajo arrendamiento, conforme al listado de los contratos de arrendamiento remitidos en informe justificado.**

**El número de vehículos que son de su propiedad y los que se encuentran bajo el esquema de arrendamiento, con actualización al siete de agosto de dos mil veintitrés.**

**La denominación o razón social de las personas morales arrendadoras de los vehículos que se encuentran bajo el esquema de arrendamiento, con actualización al siete de agosto de dos mil veintitrés.**

**El número de bienes informáticos (equipos de cómputo, impresoras y multifuncionales) que se encuentran bajo el esquema de arrendamiento, con actualización al siete de agosto de dos mil veintitrés.**

**La denominación o razón social de las personas morales arrendadoras de los bienes informáticos señalados en el punto anterior, con actualización al siete de agosto de dos mil veintitrés.**

**El presupuesto asignado al capítulo de gasto 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, del ejercicio fiscal 2021**

*Respecto de lo ordenado en los* ***numerales 1 al 5,*** *deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman, eliminen o testen de los soportes documentales objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición de la parte* ***Recurrente,*** *mismo que igualmente hará de su conocimiento.*

**Tercero.** **Notifíquese** la presente resolución al T**itular de la Unidad de Transparencia** del **Sujeto Obligado**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Cuarto.** **Notifíquese vía SAIMEX** a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnar la presente resolución vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**Quinto.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: (…) XXII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados…” [↑](#footnote-ref-2)